

¿Una historia sin fin? La crisis prolongada del neoliberalismo en México

José Guadalupe Gandarilla Salgado*,
Jaime Ortega Reyna**, Stefan Pimmer***

Resumen

El presente artículo busca entender las diferentes dimensiones de la crisis en México. Se indaga sobre el sentido económico, político y social de dicha crisis, a la vez que se busca darle un sentido al propio término de crisis. Los autores tratan de encontrar las especificidades de un país como México, en tanto que verdadera anomalía política, en un contexto como el latinoamericano que ha avanzado ya en la construcción de alternativas societales. México, en cambio, no sólo no construye alternativas sino que su modelo económico, político y social, que al parecer no tiene mayor futuro, se ha logrado mantener. *Palabras clave:* México, crisis, neoliberalismo, alternativas, militarización.

Endless History? A Prolonged Crisis of Neoliberalism in Mexico

Abstract

This article intends to understand the various facets of crisis in Mexico. It will look into the economic, political and social areas of the crisis. At the same time, it will analyze the term crisis itself. Moreover, this paper will study Mexico, as a political anomaly compared to Latin America as a region, which has moved forward in creating societal alternatives. Mexico,

* Doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México. Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, y de la Asociación Filosófica de México. Secretario académico del Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: joseg@servidor.unam

** Licenciado y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: jaime_ortega83@hotmail.com

*** Licenciado en Economía Internacional por la Universidad de Innsbruck, Austria. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en el Instituto de Sociología de la Universidad de Linz, Austria. Correo electrónico: stefan@pimmer.info

by contrast, did not create alternatives, but also it kept its economic, political and social model unchanged.

Keywords: Mexico, crisis, neoliberalism, alternatives, militarization.

Uma história sem fim? A crise prolongada do neoliberalismo no México

Resumo

O presente artigo procura entender as diferentes dimensões da crise no México. Trata dos sentidos econômico, político e social desta crise, ao mesmo tempo em que procura um sentido para o próprio termo crise. Os autores tentam encontrar as especificidades de um país como o México, uma verdadeira anomalia política num contexto como o latino-americano, que tem avançado na construção de alternativas societárias. O México, no entanto, não constrói alternativas e seu modelo econômico, político e social, que ao parecer não tem futuro, além daquele que tem conseguido estabelecer.

Palavras chave: crise, neoliberalismo, alternativas, militarização.

Un balance actual del modelo de desarrollo neoliberal en México arroja saldos negativos en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. El estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2008 causó una profunda recesión de la economía mexicana, agravando todavía más la situación en la que las últimas administraciones la habían encaminado. La extrema vulnerabilidad y dependencia del exterior va de la mano con un aumento de la precarización laboral y la pobreza patrimonial y alimentaria (Enciso, 2011). La destrucción sistemática de empleos formales ha engrosado un ya de por sí gran ejército industrial de reserva tanto rural como urbano, cuyas posibilidades de supervivencia se limitan a la economía informal, la migración o la incorporación al crimen organizado.¹ En este contexto hay que analizar también el panorama desolador de la actual crisis de seguridad: más que contener la ola de violencia, la llamada “guerra contra el narco” del gobierno federal y su estrategia de militarización parecen ser su propia causa, cobrando hasta ahora alrededor de 50 mil muertos y 5 mil desaparecidos.² Bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado han aumentado las violaciones a los derechos

¹ La última encuesta de 2005 mostró que sólo entre los jóvenes de 12 a 29 años hay 7.5 millones que ni estudian ni trabajan; un porcentaje de 45 por ciento de jóvenes entre 15 y 19 años (Álvarez Béjar, 2011). Este dato, callado por el gobierno federal, significa un campo de reclutamiento sumamente fértil para el crimen organizado.

² Es necesario señalar que las razones mediante las cuales el gobierno justificó la llamada “guerra contra el narco” resultaron ser falsas y fueron refutadas empíricamente. Se ha comprobado que el aumento de la violencia –la justificación *par excellence* del gobierno para empujar a los militares a la calle– se originó después de la militarización de la vida pública, ya que los indicadores de violencia hasta el año 2006 iban a la baja y aumentaron súbitamente a partir de entonces (Morales Oyarvide, 2011).

humanos por parte del Estado, acercando al país a una situación similar a la de las dictaduras militares del Cono Sur en los años setenta y ochenta del siglo pasado (Tejeda, 2011). El socavamiento de los derechos políticos y sociales, y la corrosión de las bases del Estado de derecho han propiciado además una crisis política, que se expresa en una falta de legitimación y de representatividad de los políticos en todos los niveles de gobierno. Al respecto, el fraude de las elecciones presidenciales en 2006 acabó con las esperanzas democráticas que había suscitado el relevo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la presidencia de la República. Es significativo que la subsiguiente militarización del país ha abierto y consolidado espacios autoritarios que permiten la continuación de la política económica neoliberal, prolongando y profundizando de esta manera la grave crisis económica.

Desde una perspectiva histórica, el panorama actual de inestabilidad y de múltiples crisis entrelazadas entre sí contrasta con los tiempos del fordismo periférico. Basado en el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), esa fase se caracterizó por un alto y sostenido crecimiento económico, que entre 1940 y 1970 alcanzó un promedio anual de 6.5 por ciento (Boris, 1996:11). En lo político, este “milagro mexicano” se sustentaba en un régimen autoritario caracterizado por tres pilares: el presidencialismo, el corporativismo y el partido único. Con base en este entramado institucional, se logró, por un lado, integrar los diferentes sectores de la sociedad al Estado, facilitando, por otro lado, el ejercicio de un amplio control político. Fue con la crisis mundial de 1974 y la subsiguiente recomposición del capitalismo a nivel regional que el fordismo periférico llegó a su fin.

En México, este “cambio de época” (Roux, 2005:225) rompió los soportes, acuerdos y equilibrios que habían prevalecido durante el fordismo periférico tanto en lo económico como en lo político y lo cultural. La crisis de la deuda en 1982 marcó el fin definitivo de la industrialización por sustitución de importaciones, al mismo tiempo que abrió la puerta al modelo de desarrollo neoliberal, impuesto primero mediante los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI), y luego por las reformas estructurales de los propios gobiernos en turno. A pesar de que el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) señaló en repetidas ocasiones que México estaba a punto de entrar al primer mundo, la promesa neoliberal de progreso y libertad habría de resultar una quimera. La liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, más la privatización de las empresas públicas, la reducción del gasto público y una política financiera y monetaria que privilegia la estabilidad de precios no han sido capaces de propiciar un crecimiento alto y sostenido. En términos políticos, la supuesta liberalización

de los viejos lazos autoritarios y corporativistas dio origen a una ciudadanía sin contenido, cuyo alcance tropieza con los estrechos límites que los poderes fácticos y las corrompidas instituciones del Estado le están imponiendo.

En resumidas cuentas, el desempeño del modelo de desarrollo neoliberal en las tres últimas décadas arroja un resultado desolador. El deterioro en los ámbitos económico, político y social, y sus efectos perjudiciales para la mayoría de los mexicanos indican que el país se encuentra inmerso en una crisis cuyas repercusiones ya no se dejan resolver dentro de los paradigmas neoliberales. Tanto más sorprende que no se vislumbra ningún cambio del modelo predominante. El descontento y la crítica al neoliberalismo, expresado por una vasta gama de movimientos sociales, campesinos, indígenas, sindicales o de derechos humanos, no tiene repercusiones notables dentro del entramado institucional del Estado. Esto da origen a una situación paradójica: en medio de una crisis generalizada, los gobernantes optan por una ampliación y una profundización de los instrumentos neoliberales causantes de los destrozos económicos y políticos. En otras palabras, a pesar de su fracaso en términos de desempeño económico y de bienestar social, el modelo neoliberal se ha estabilizado en su inestabilidad, dado que las fuerzas políticas que pudieran haberse movilizado en su contra hasta ahora han carecido de articulación tanto en el terreno del Estado como fuera de él. Es el objetivo principal de las siguientes páginas analizar esta prolongada crisis del modelo neoliberal, para evaluar su estado de salud, o sea, sus reservas de estabilidad, así como sus posibles puntos de ruptura. Para tal fin, en un primer paso se contextualiza la coyuntura latinoamericana y mexicana dentro de la crisis de onda larga depresiva en que se encuentra envuelto el capitalismo a nivel mundial. Las consecuencias económicas y sociales de esta recomposición capitalista a nivel nacional, o sea, la imposición y los efectos del proyecto neoliberal en el caso de México, son tema del siguiente apartado. Por último, se caracterizan los rasgos de la crisis política. Se intenta mostrar que la falta de legitimidad y de representatividad del régimen político actual es recompuesta con soportes autoritarios que, a fin de cuentas, posibilitan extender aún más la crisis del modelo neoliberal.

La turbulencia de la crisis global del capitalismo

La crisis actual del capitalismo se manifiesta en tan variados ámbitos y en tal grado de crudeza que ha concitado un vasto abanico de expresiones para intentar caracterizarla y tratar de asir sus contenidos más significativos. Su rumbo momentáneo la dirige a campos problemáticos que cuestionan lo que

había sido su fortaleza anterior, o sea, la alta capacidad auto adaptativa del sistema capitalista. Parecen surgir y agudizarse en la actualidad (y, literalmente, a la hora de escribir estas páginas) contradicciones insalvables en ámbitos que cuestionan la reproducción de su hegemonía y anuncian coyunturas inciertas: una vulnerable situación monetaria, por las dificultades para sostener la divisa de reserva mundial, el dólar, y la que se erigía como posible sustituta, el euro; el estallido de problemas de sobreendeudamiento privado de los hogares y de la cartera de deuda pública en Estados Unidos, y la crisis fiscal en la Eurozona. Estos son ámbitos en que la condición de superpotencia indisputada se pone en entredicho, propiciados por el verdadero problema de fondo que es la insana situación productiva de la economía mundial entera, y en especial la norteamericana. En una auténtica guerra de clases llamada neoliberalismo, esta última ha logrado, en contra del espíritu de Franklin, erigir una sociedad de, por y para el uno por ciento de los super ricos.

Sin sucumbir a la muy “larga duración” y referirse a ella como crisis “civilizatoria”, algo mucho más amplio o comprometedor que “estructural”, “sistémica”, “terminal” u “orgánica” (por acudir a una jerga más clásica) podemos, de entrada, servirnos de la historia y decir que los eventos a los que se ha precipitado el sistema capitalista de 2008 a la fecha, son tendencias que profundizan una crisis que se viene arrastrando desde inicios de los años setenta del siglo XX (Amin, 2009). Por cierto, no se trata sólo de una crisis financiera, aunque esa dimensión está comprometida de manera grave, y tampoco de una crisis meramente presupuestal o de los niveles de gasto de los gobiernos, desequilibrios que se explican por la negativa de gravar, por lo menos levemente, a los sectores de mayores ingresos y al gran capital. La orientación de la tributación hacia los trabajadores y la restricción de los gastos sociales del gobierno, muy al contrario de solventar la situación, contribuyen todavía más a la parálisis económica. Es por ello que encontramos el parangón de esta crisis financiera y económica que mutará en recesión global y generalizada en un futuro muy próximo, en aquella coyuntura que los historiadores dieron en calificar como la “gran crisis” de fines del siglo XIX, esto es, la que comprendió el periodo entre 1873 y 1896 (Gandarilla Salgado, 2008).

Como aquélla de fines del siglo XIX, la crisis de onda larga depresiva a partir de los años setenta del siglo XX, trató de resolverse rompiendo las amarras al capitalismo y orientándolo hacia lo que Karl Polanyi dio en llamar “la gran transformación” (capitalismo de los cárteles, los *trusts* y el capital financiero nacientes, en aquella ocasión; auge de la gran corporación, los oligopolios y la mundialización financiera, ahora) e impulsando su expansión

artificial o efímera (*belle époque*, en aquella época, globalización, Nueva Economía y burbuja financiera, ahora), pero abriendo las bases de una política de conquista y saqueo (imperialismo clásico y reparto de África, en aquella etapa, impulso de las guerras humanitarias y de ocupación, ahora). La primera Gran Guerra europea no solucionó las contradicciones de aquella mundialización y, en cambio, abrió una confrontación de treinta años, en cuyas hostilidades precipitó los descalabros financieros de 1929 y la recesión productiva de toda la década siguiente. De ello pudo salirse únicamente a través del nuevo “compromiso histórico” que abatía la otra opción que se abrió al capitalismo y modernismo reaccionario (Herf, 1990; Griffin, 2010), esto es, el fascismo al que habían optado militantemente varias naciones europeas. Esto inauguró el periodo floreciente e indisputado de “hegemonía norteamericana” que sólo duró los así llamados “treinta gloriosos” años, sobre la base del impulso keynesiano de la demanda efectiva, la recuperación europea luego de Bretton Woods y el fomento de los mercados internos con base en alzas relativas de la remuneración obrera (directa e indirecta).

La desventura actual es que la presente situación no parece acogerse a soluciones keynesianas, ni a ninguna unilateralidad ortodoxa según la disciplina económica convencional. Tampoco los enfoques institucionalistas parecen ser suficientes por las aporías provocadas en dicho ámbito, dado que la desregulación global fue hecha a imagen y semejanza de los intereses de los complejos corporativos (el militar-industrial y el biotecnológico-farmacéutico, por mencionar dos representativos). No se ve luz al final del túnel ni apertura de una nueva onda larga expansiva, pareciera que Kondratiev se ha olvidado de nosotros. No obstante, muchos analistas han pronosticado el inicio de tal nuevo ciclo (lo hicieron, a mediados de los noventa, y se dieron de topes con la crisis asiática; lo volvieron a prefigurar, luego del “espejismo Obama”, y miren dónde nos hallamos). Lo que se avizora, por el contrario, es la continuación de una crisis prolongada e integral (escribiendo sobre México es inevitable incurrir en tal caracterización), si no es que el comienzo de otros “treinta tenebrosos”. A fin de cuentas, y aunque suele ser negado, el mundo entero no está a salvo de soluciones reaccionarias como en el pasado.

También como en la crisis de cierre del siglo XIX, se está ingresando, con los acontecimientos recientes, a una coyuntura análoga a la de 1929 (Marichal, 2010). Las devastaciones calamitosas de la economía, sin embargo, serán mayores, si tomamos en cuenta los límites ecológicos, energéticos y alimentarios a los que ahora se encuentra expuesto el sistema mundial. Ya pasamos por la primera y segunda Guerra del Golfo, y no parece haber sustitución hegemónica (la estrategia China suele acogerse a temporalidades

más largas que las occidentales y a la “propensión de las cosas”, antes que a protagonismos innecesarios y costosos). Tampoco es seguro que haya soluciones regionalizadas o multipolares (esto último, si es que no, en el camino, la debacle es tal que las previsiones de Einstein sobre la cuarta guerra mundial se hicieran realidad). Si el pasado fue, realmente, un “largo siglo XX” (Arrighi, 1999), esta coyuntura lo cierra, con la posible disolución de una moneda mundial que resguarde las transacciones foráneas, el signo y la reserva del valor. Basta recordar, sin embargo, que antaño, en los periodos que han entregado un nuevo hegemon indisputado, en los cinco siglos de desarrollo capitalista, ello se ha decidido (en las tres ocasiones en que algo así ha acontecido: con los Países Bajos en el siglo XVII; Inglaterra en el XIX, y Estados Unidos en el XX) a través de hacer comparecer la opción bélica, instrumento innegable para la destrucción de capital. No hay lugar al optimismo tomando en cuenta el programa en el que se embarcaron la derecha y los halcones norteamericanos.

Si analizamos una temporalidad más modesta, la de la coyuntura de los años setenta del siglo pasado hasta ahora, resalta que las repetidas crisis a partir de ese entonces no son sino el resultado de la aplicación de los remedios que se instrumentaron para darles solución. Ya desde fines de los sesenta, en un movimiento acompasado que involucró a todos los centros desarrollados, crecieron los problemas por la caída en la rentabilidad, la sobreproducción y la baja formación de capital. El boicot de los países árabes a Estados Unidos contribuyó al estallido de la crisis-señal en 1974 y 1975, que implicó un deterioro de la forma estatal de control político y obligó a la reestructuración total del orden del capital (Ávalos Tenorio, 2007:117). Las visiones superficiales quisieron ver en el alza del petróleo el detonante de esta reestructuración (luego de la guerra de Yom Kippur). Lo cierto es que la solución a tal situación fue no sólo la alianza estadounidense con las dinastías árabes (petróleo a cambio de protección) sino el reciclamiento de los petrodólares desde la “City de Nueva York”; ello dio impulso a la propensión rentista y a la vocación compradora en las burguesías de casi todo el Tercer Mundo. Su resultado fue el aumento de la deuda externa y el ahorcamiento financiero de los países que incurrieron en tal expediente, luego del alza en las tasas de interés a inicios de los ochenta. México declaró la primera moratoria en 1982, y se entregó de lleno al cumplimiento del credo neoliberal que ya se había comenzado a instrumentar en América Latina (con el uso de la bayoneta y *manu militare* de por medio) a través de las dictaduras de Seguridad Nacional, en un recorrido que entre otros países alcanzó a Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

De esta manera, América Latina fue convertida en un laboratorio de experimentos neoliberales que comenzaron con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile a partir de 1973. Desde el inicio, esta reestructuración fue entendida como una recomposición de clase (Anderson, 1997): la imposición de los programas neoliberales implicó la destrucción del régimen de acumulación fordista, disolviendo los viejos compromisos entre trabajo y capital, y optando por una mayor movilidad y flexibilidad de este último. Mediante la liberalización de las actividades especulativas y el aumento del nivel de los intereses, se favoreció sobre todo al capital financiero. Su desregulación, sin embargo, no se dio en términos de una lucha capital contra el Estado, dado que los programas neoliberales se gestaron en el propio seno de este último: el Estado cedió por un lado el control sobre los movimientos del capital, reprimiendo por el otro las reivindicaciones salariales y relegando tanto la generación de empleos como la protección social (Duménil y Lévy, 2007:30). Con esto, se propició la concentración y la apropiación de la riqueza social ya existente, fuentes primordiales de acumulación bajo los paradigmas neoliberales. El crecimiento económico, por el contrario, parece ser condición prescindible para este modelo de desarrollo, como muestra el caso mexicano: un endémico estancamiento es compensado por una alta concentración de ingreso y una acumulación por desposesión, posibilitando el reciclaje de la riqueza social generada en otros sectores dentro de los circuitos financieros.

Durante la década de los ochenta, uno a uno los países latinoamericanos se comprometieron con los paradigmas que posteriormente fueron resumidos en el Consenso de Washington. Frente a la creciente fuerza del neoliberalismo, los populismos trasnochados de Alan García en Perú y de Carlos Andrés Pérez en Venezuela tenían un limitado horizonte temporal. En los años noventa, la vasta propagación del Consenso de Washington fue tal que dio lugar a un neoliberalismo pintoresco, como evidenciaron los casos de Fernando Collor de Mello en Brasil, de Carlos Saúl Menem en Argentina o de Abdala Bucaram en Ecuador. Las élites y oligarquías dominantes en la región podían incurrir en tales excesos, pues el neoliberalismo experimentaba un alcance prácticamente global y cobraba la forma de nuevo sentido común de la época. Su victoria parecía también ideológica. Los otros tres modelos que pudieron haberle disputado la hegemonía fracasaron: hubo debacle, a inicios de los años noventa del siglo pasado, de los proyectos de liberación nacional (con la derrota de los sandinistas en Nicaragua y el proceso de negociación en El Salvador); al mismo tiempo, se precipitó la caída del socialismo de tipo soviético; los programas socialdemócratas, a su vez, sufrieron una rara evolución y terminaron siendo más neoliberales que los propios neoliberales (Gandarilla

Salgado, 2003:110–117). Ese panorama comenzó a cambiar a inicios del siglo XXI con el anticipado levantamiento popular conocido como el “Caracazo” en Venezuela y el “¡Ya basta!” zapatista en Chiapas, México. La creciente resistencia contra los paradigmas neoliberales se extendió también al ámbito del Estado y a la política exterior, como muestra la emergencia de una serie de gobiernos adversos al Consenso de Washington y el freno al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estados Unidos, presionado por haber llegado al Peak Oil, orientó su política exterior hacia el Asia Central y la región del Cáucaso (Howard Kunstler, 2007). Con esto abrieron un campo de oportunidad que muchos países latinoamericanos aprovecharon para distanciarse en diferentes grados del proyecto hemisférico estadounidense. La oligarquía mexicana, sin embargo, no quiso o no pudo aprovechar esta circunstancia; estaba maniatada de manera voluntaria primero por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y luego por la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a la cual las élites mexicanas se han encadenado por la falta de legitimidad de su proyecto económico social. El enganche al curso del decadente hegemon, que a nivel nacional se manifiesta en un modo de acumulación oligárquico y depredador, sin embargo, ha precipitado un ciclo de crisis que tiene consecuencias cada vez más graves para la mayoría de los mexicanos.

Neoliberalismo a la mexicana: estancamiento y desastre social

La crisis económica actual, desatada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, evidencia una fragilidad y descomposición extremas de la economía mexicana. La gravedad de la recesión actual es consecuencia de una política económica que durante tres décadas ha privilegiado el sector financiero y los enclaves manufactureros de exportación. Tanto las altas tasas de interés como el enfoque en el comercio exterior eran una estrategia reaccionaria para enfrentar la crisis económica de 1974 y 1975, y la subsiguiente reestructuración capitalista a nivel mundial. En ese entonces, México había atravesado un largo periodo de alto crecimiento de 6.1 por ciento anual entre 1934 y 1982, basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Los pilares de ese “milagro mexicano” fueron un mercado interno relativamente amplio y una fuerte intervención por parte del Estado en los procesos económicos, consistiendo en la protección comercial por restricciones directas a las importaciones, subsidios fiscales, promoción de industrias y empresas junto con un control directo de la industria básica (Cordera Campos *et al.*, 2009).

En los setenta, sin embargo, se mostraron las primeras señales de agotamiento de este modelo de desarrollo. Por un lado, la sustitución de importaciones se había concentrado en los bienes de consumo inmediato, descuidando los bienes intermedios y de capital; el consiguiente déficit en la balanza comercial generó una creciente presión sobre las divisas del país. Por otro lado, al limitarse las medidas redistributivas y el ingreso de los trabajadores, se dificultó la ampliación del mercado interno. A esto se agregó la decreciente productividad y competitividad de las empresas estatales, cuya protección arancelaria desmotivó una rápida adaptación ante el nuevo impulso de la revolución tecnológica en ciernes. A mediados de los años setenta, el acceso fácil a créditos del extranjero y el descubrimiento de vastos campos de petróleo en el sur de México dieron un nuevo impulso a la economía mexicana. La petrolización y el endeudamiento externo, sin embargo, sólo lograron aplazar el derrumbe del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. La reducción de los precios de petróleo y el súbito aumento de los intereses de la deuda a inicios de los ochenta redujeron los ingresos fiscales y aumentaron drásticamente el gasto público, provocando finalmente la quiebra de las finanzas públicas en 1982.

La crisis de la deuda cerró de manera definitiva la fase de sustitución de importaciones, al mismo tiempo que abrió las puertas a una reestructuración económica bajo los paradigmas neoliberales. Ya desde antes los nuevos tecnócratas neoliberales se habían colocado en posiciones estratégicas dentro del Estado, sobre todo en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde estas posiciones pudieron aprovechar la crisis de la deuda para marginalizar a los políticos comprometidos todavía con el modelo de desarrollo anterior (Babb, 2003). El resultado fue la más estricta aplicación de los programas de ajuste acordados con el Fondo Monetario Internacional a partir de 1982, con el supuesto propósito de reducir la deuda y de estabilizar la economía, sobre todo en cuanto a los altos niveles de inflación. La subsiguiente implementación de las políticas de austeridad, incluyendo la restricción de la demanda interna por medio del control salarial y la reducción del gasto público, sin embargo, apuntó a otro objetivo principal: el restablecimiento del servicio de la deuda. Entre 1982 y 1986 se pagaron más de 31 mil millones de dólares al exterior –en términos relativos 1.6 veces más que las reparaciones de guerra pagadas por Alemania en la entreguerra– sin reducir en lo más mínimo el monto total de las deudas (Cordera Campos et al., 2009:13). Además de esta gigantesca transferencia de excedentes en forma de intereses, también los ingresos generados por las privatizaciones se dedicaron en gran parte al pago de la deuda. A excepción de algunas ramas

estratégicas, la privatización afectó a todo el sector público: empresas consideradas no estratégicas, la minería, la aviación, la telefonía, la televisora estatal, la administración de carreteras, entre otras, fueron entregadas a manos privadas (Moreno Brid y Ros Bosch, 2010). La consecuencia de esta gran venta no fue un aumento en la competitividad de las empresas privatizadas, como habían prometido los apóstoles del neoliberalismo, sino el fortalecimiento y la ampliación de las estructuras oligopólicas y monopólicas operantes en prácticamente todas las ramas de la economía.

En cuanto a la liberalización financiera, otro de los ejes básicos del proyecto neoliberal aplicado en México, las reformas estructurales llevadas a cabo a partir de 1988 incluyeron la liberalización de los mercados e intermediarios financieros, la privatización bancaria, la apertura de la economía al capital extranjero y la autonomización del banco central. Con este último paso, emprendido en 1993, la doctrina neoliberal fue llevada a rango constitucional, privilegiando la estabilidad de los precios en desmedro del crecimiento económico. A su vez, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) un año después implicó una institucionalización de los dogmas neoliberales en el terreno internacional: aseguró la apertura comercial abriendo las fronteras mexicanas a la producción estadounidense tanto industrial como agrícola. Además, las normas del tratado concedieron trato nacional a los inversores extranjeros, otorgándoles el estatus de sujetos de derecho. Con esto, se abrió la posibilidad de demandar al Estado mexicano si éste buscara restringir o impedir sus actividades productivas o comerciales (Arroyo Picard, 2009:47). Mención aparte merece el cambio en la posesión de la tierra comunal y ejidataria por la reforma agraria en 1992, punto culminante de un continuo abandono de las actividades agropecuarias por parte del Estado a partir de 1983. Más allá de su significado material, la posibilidad de incorporar la tierra en los circuitos del mercado capitalista implicó una profunda ruptura con los logros de la Revolución de 1910: la reforma del artículo 27 constitucional cerró de manera definitiva el reparto de las tierras productivas y apuntó a la disolución de la comunidad agraria (Roux, 2007:98). Como consecuencia, han surgido cientos de proyectos inmobiliarios a costa de la vida campesina y de su producción, que se ve confrontada además con los productos estadounidenses altamente subsidiados.

Como era de esperar, el retiro del Estado de las actividades económicas y la apertura hacia el exterior no dejaron de afectar a la estructura productiva del país. La privatización y la desregulación anularon cualquier intento de política económica planificada y procedieron a dejar el destino del sector productivo en manos de las “libres” fuerzas del mercado, es decir, de los

viejos y nuevos monopolios y oligopolios. De esta manera, se propició una fuerte polarización de la economía: por un lado, se consolidaron las grandes empresas a menudo enfocadas al mercado exterior, con la introducción de tecnologías de punta y/o la flexibilización de las relaciones laborales y el empleo intensivo de mano de obra barata; por otro lado, para un gran número de pequeñas y medianas empresas, orientadas en su mayoría al mercado interno, se dificultó el acceso al crédito público y privado, llevando a una reducción en los niveles de capitalización y de productividad (Imhof, 2003:108). El eje de este modelo de industrialización exportadora son las maquiladoras: centros de manufactura en las ramas de electrónica, textiles y maquinaria, situados a lo largo de la frontera norte y en el centro del país. Estas empresas se basan en la importación de insumos para el ensamblaje y la subsiguiente reexportación a Estados Unidos y Canadá, un tipo de exportación de mano de obra sin que ésta salga del país (Tello, 2010:37). Los tratos preferenciales concedidos a las maquiladoras en el área de aranceles e impuestos explican su magra contribución a los ingresos fiscales, y por su escasa integración intersectorial, el aumento de las exportaciones de maquila tampoco influye de manera significativa en el Producto Interno Bruto (PIB). No es de sorprender, por lo tanto, que el enfoque en la producción manufacturera para el mercado exterior no se haya convertido en el motor de arrastre del resto de la economía. Aunque subieron de manera significativa las exportaciones como porcentaje del PIB, no repercutieron en los demás sectores y en el crecimiento económico en general. Además, es necesario mencionar que la caída de las exportaciones manufactureras a partir de 2008 no se debe sólo a la recesión en Estados Unidos, es también consecuencia de la creciente competencia de los productos chinos que contribuyen al reducido dinamismo de la maquila mexicana (Dussel Peters, 2009), evidenciando una gran vulnerabilidad de este modelo que favorece la industrialización orientada a las exportaciones en desmedro de la producción para el mercado interno.

Estos procesos de concentración y de apertura hacia el exterior no sólo provocaron una transformación de la estructura productiva sino también de las relaciones laborales y de la distribución del ingreso. Al respecto, la industrialización exportadora y la privatización de las empresas públicas debilitaron el papel y el tamaño de los grandes sindicatos oficiales, cuyos vínculos con el gobierno fueron disueltos o modificados para ajustarse a los nuevos paradigmas económicos (Pirker, 2001). La disolución y modificación de los lazos corporativos y clientelares propició a su vez una creciente flexibilización, precarización e informalización del trabajo, necesario para el nuevo modelo de industrialización exportadora. Estas tendencias no dejaron

de tener sus efectos sobre el poder adquisitivo de los salarios: tomando en cuenta los niveles del salario mínimo, entre 1983 y 2009 éste perdió 71.3 por ciento de su poder adquisitivo (Calva, 2010:26). En cuanto a la precariedad, es significativo que hoy en día casi 50 por ciento de los trabajadores asalariados no cuentan con un contrato de trabajo escrito, mientras que 45 por ciento no tienen acceso a instituciones de seguridad social (Tello, 2010:36). Además, hay un gran auge de la subcontratación así como del mercado informal que abarca a 20 millones de ocupados (Samaniego, 2010:55). Como hemos mencionado, esta reestructuración de las relaciones laborales repercutió también en la tasa de sindicalización: en cuanto al sector industrial, ésta ha experimentado una drástica caída de 22.1 por ciento en 1992, a menos de 10 por ciento en 2008 (Zepeda Martínez, 2009:68). La conjunción de estos factores junto con una más que insuficiente creación de nuevos empleos frente al aumento anual de la población económicamente activa (PEA), entre uno y 1.2 millones de personas (Tello, 2010:35), explica también la creciente desigualdad en el país. A partir de 1984, el coeficiente Gini indicó un drástico aumento y se quedó en niveles mayores a 52 puntos hasta una ligera reducción en 2006, para subir de nuevo a partir de entonces. En cifras absolutas, la creciente desigualdad en el sexenio calderonista se refleja en un aumento de la po-breza patrimonial: de 42.6 millones en 2006 a 51.3 en 2010.

En resumen, el saldo del modelo de desarrollo neoliberal en términos económicos y sociales es claramente negativo. Comparado con el crecimiento económico del modelo de sustitución de importaciones -3.2 por ciento *per capita* entre 1934 y 1982-, el crecimiento del modelo neoliberal apenas llega a un promedio de 0.5 por ciento entre 1983 y 2009, reduciéndose a 0.1 por ciento si se toman en cuenta los flujos de migración que en este periodo salieron a Estados Unidos (Calva, 2010:16). Por un lado, el estancamiento se explica por el constante deterioro del mercado interno, así como de la desarticulación de la planta y de las cadenas productivas internas; por otro lado, la liberalización financiera y la industrialización orientada al mercado exterior no cumplieron su papel esperado de fuerza motriz del resto de la economía. Por el contrario, las cuentas con el exterior, tanto comerciales como financieras, aumentaron a un grado extremo la vulnerabilidad de la economía mexicana. Esto se mostró en la crisis del tequila de 1994 -propiciada por los canales financieros- y en la reciente crisis *subprime*, que fue transmitida por la caída de la demanda estadounidense, de la inversión extranjera directa y de las remesas. Junto con un creciente desempleo, esas dinámicas explican también la persistente desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, así como el aumento de la pobreza tanto patrimonial como alimentaria. Por

fin, el énfasis en la extraversion y la financiarización de la economía mexicana han surtido efectos claramente negativos tanto para los trabajadores rurales y urbanos como para un buen número de pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interior. El carácter rentista y monopolístico, en cambio, favorece a los grandes consorcios (trans) nacionales. Su enorme concentración de poder económico parece ser lo suficientemente redituable para evadir cualquier aspecto productivo que requiera incentivar el mercado interno. Esto se mostró sobre todo en medio de la reciente crisis económica: mientras en 2009 el PIB anotó una caída de 6.1 por ciento, once de los consorcios más grandes del país pudieron reportar ganancias netas por 181 mil 651 millones de pesos, aumentando sus utilidades con relación al año anterior en 46 por ciento (Paz, 2010:34). A primera vista sorprendente, este dato se explica por la forma contradictoria de la reproducción del capital en México. Por un lado, ancla los salarios por debajo de la inflación y del valor de la fuerza de trabajo, permitiendo, por el otro, el acceso al consumo masivo de los grupos populares vía la expansión casi ilimitada del crédito. De esta manera, los grandes grupos empresariales logran mantener o hasta incrementar sus utilidades en medio de la crisis económica. La profunda recesión, la pérdida de poder adquisitivo, así como la creciente pobreza no significan saldos negativos para ellos, mientras puedan seguir formando monopolios de servicios con altos precios, o bien refugiarse en el mercado exterior. De cualquier forma, se ven beneficiados por el actual modelo de desarrollo neoliberal y se han empeñado en que éste –a pesar de su crisis en términos económicos y sociales– continúe a toda costa.

Los rasgos de la crisis política y el surgimiento de un nuevo autoritarismo militarizado

Igual que en el caso de la crisis económico-social, es necesario buscar las raíces de la actual crisis política en la reestructuración del capitalismo a nivel mundial, operante a partir de los años setenta del siglo pasado. Y es que dicha reestructuración, que se ha llevado a cabo bajo la forma neoliberal, no implica sólo la imposición de un modelo de política económica, más bien apunta hacia una transformación radical de la sociedad en su conjunto que afecta a los ámbitos económico, político y cultural. No es casual, por lo tanto, que México firmara su primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el mismo año –1977– que emprendió una reforma electoral que habría de ser el punto de partida de una “transición prolongada” hacia la democracia (Labastida Martín del Campo y López Leyva, 2004). Dicha reforma,

posteriormente considerada como primera apertura del régimen autoritario priísta, en realidad era un intento de apaciguar un descontento político y social cada vez más generalizado que se expresó en el surgimiento de diferentes movimientos sociales a partir de los años sesenta. El reclamo de estos movimientos pone de manifiesto las incipientes fisuras de un pacto político³ cuyo cumplimiento explica en buena medida la estabilidad del fordismo periférico mexicano. Su origen, sin embargo, proviene del periodo de la colonia: se trata de un compromiso entre el monarca español y los súbditos organizados en estamentos que transfirieron al primero sus derechos políticos para obtener a cambio protección y bienestar social. Esta politicidad del contractualismo antiguo, o sea, la forma corporativa de entender y de hacer política, sobrevivió al avance de las ideas liberales en el siglo XIX y se plasmó en la Constitución de 1917, como evidencian entre otros los artículos 27 y 123 (Roux, 2005:113-130). Dicho pacto fue también la columna vertebral del régimen priísta a partir de los años treinta del siglo XX. Su legitimidad no pasaba por el reconocimiento de los derechos políticos ciudadanos (sufragio universal, elecciones de gobernantes, libertad de asociación y disidencia partidaria) sino por el cumplimiento del compromiso que se asienta en el intercambio entre derechos sociales corporativos por lealtad y obediencia. “En ese acuerdo no escrito los ciudadanos no *elegirían* a quienes los gobernarían: *vigilarían* que éstos cumplieran con lo pactado” (*Ibid.*:168, cursivas en el original). En lugar de la monarquía, la configuración institucional del pacto consistía en los tres pilares: presidencialismo, corporativismo y partido único. La dirección estatal de los procesos productivos y el acceso directo a los presupuestos públicos, a su vez, eran los sustentos materiales que posibilitaron dicho intercambio de bienestar social por lealtad política.

A partir de los años sesenta y setenta, sin embargo, la reestructuración capitalista a nivel mundial dio lugar a una serie de transformaciones que habría de limitar el margen de maniobra de esa relación particular de mando-obediencia. La crisis económica mundial de 1974-1975 y la subsiguiente búsqueda de nuevas esferas de valorización de capital empezaron a corroer los sustentos materiales del pacto político priísta. Iniciada ya la segunda –difícil– fase de sustitución de importaciones (Boris, 2009:46), la presión

³ La noción de “pacto político” no refiere aquí a un contrato que en los hechos es firmado por los gobernantes y gobernados. Es más bien una figura simbólica de la filosofía política que alude “al momento del acuerdo en que debe reposar todo ordenamiento político (...) que da cuenta de la conformidad de los hombres con las reglas que regulan su vida como miembros de una comunidad civil y, por tanto, de su disposición a acatarlas y obedecerlas.” (Roux, 2005:44).

inflacionaria y los crecientes problemas presupuestales dificultaron cada vez más el cumplimiento cabal de los compromisos sociales establecidos. Si bien es cierto que el descubrimiento de vastos campos de petróleo así como el acceso fácil a los créditos provenientes del extranjero prolongaron de manera artificial una política económica en apuros, finalmente sólo lograron aplazar una nueva crisis económica –la de 1982– que implicó un retiro violento de las actividades estatales de los procesos productivos y de la economía en general, y con ello el abandono de uno de los principales pilares materiales de legitimidad del viejo régimen. La manifestación más clara del quiebre de los lazos corporativos y tutelares, y de la subsiguiente crisis de legitimidad se demostró con el surgimiento del movimiento cardenista y en el fraude de las elecciones presidenciales de 1988. En ese contexto, las reformas electorales de 1989-1990, 1993, 1994 y 1996 buscaban limitar cada vez más la influencia priísta y presidencialista sobre las instituciones electorales. Para recuperar una legitimidad política perdida en años anteriores se emprendió una carrera hacia adelante. Las medidas y transformaciones institucionales ya no se orientaron hacia la reconstrucción del viejo pacto corporativo, se inclinaron, por el contrario, a la difusión de las instituciones (neo)liberal-democráticas que habrían de sustituir la vieja legitimidad corporativa.

De esta manera, la promesa de bienestar se cambió por la promesa de libertad, democracia y ciudadanía, elementos que se iban a insertar en el marco de un Estado neoliberal. Era un cambio radical de las formas de entender y de hacer política. Desde la doctrina liberal, la comunidad política se constituye a partir de individuos abstractos portadores de derechos universales, y no desde derechos sociales corporativos emanados de la posición concreta de los individuos en la sociedad (Roux, 2005:115). Es necesario, sin embargo, analizar con más detenimiento este proceso presentado como transición democrática civilizada y sus resultados, supuestamente culminando en la alternancia presidencial del año 2000. Al respecto, una ampliación del enfoque unilateralmente limitado a las instituciones electorales pone al descubierto tanto las inercias autoritarias del viejo régimen priísta como el surgimiento de nuevos poderes fácticos que restringen a un grado extremo la ciudadanía y la eficacia de las instituciones electoral-democráticas.

Para empezar, la llamada “transición a la democracia” se pregonó desde la esfera estatal misma, claramente diseñada como una estrategia de legitimación ante el fraude electoral en 1988 (Fernández Christlieb, 2009:247). Además, hay que tomar en cuenta que la transformación institucional sólo era una cara del proceso, siendo la otra la llamada guerra sucia en contra de los movimientos sociales y guerrilleros que se extendió también al ámbito

de los partidos, con el asesinato de aproximadamente 300 militantes del Partido de la Revolución Democrática entre 1988 y 1994 (Gómez Tagle, 1994:34). Un análisis de las instituciones electorales contradice la proclamada llegada a la democracia: a pesar de una autonomía efectiva entre 1996 y 2003, a partir de entonces el desempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –máximas autoridades electorales del país en términos de jurisdicción– apunta hacia la cooptación por parte de los partidos políticos y una subsiguiente pérdida de confianza del electorado (Huchim, 2009:173, Merino, 2009:246). Al respecto, el fraude en las elecciones presidenciales de 2006 acabó con las esperanzas democráticas y profundizó todavía más la crisis de legitimidad y de representatividad iniciada en los setenta del siglo pasado.

En fin, el neoliberalismo rompió los viejos lazos corporativos sin ofrecer sustitutos institucionales sobre los que se podría basar una efectiva ciudadanía de la sociedad mexicana. La flexibilización laboral, la contrarreforma agraria diseñada para disolver el ejido, la privatización de los bienes públicos y la integración al proyecto hemisférico de Estados Unidos imposibilitaron de antemano la realización material de los derechos universales, núcleo imprescindible de cualquier proceso de ciudadanía (Dagnino *et al.*, 2006:62). Y lo que a primera vista podría haber parecido como una efectiva democratización de las instituciones estatales implicaba en realidad el surgimiento de nuevas estructuras autoritarias. Así, la pluralización en el ámbito de los partidos políticos no significó un mayor acceso a los centros de decisión estatales sino a la formación de una partidocracia que se caracteriza por su poca representatividad y sus prácticas clientelares (Fernández Christlieb, 2009:250). De igual manera, la autonomización de los medios masivos de información en cuanto al control por parte del gobierno no dio lugar a una oferta informativa más diversificada. Al contrario, la “apertura democrática” provocó una enorme concentración del poder mediático poco regulado y con tendencias claramente autoritarias (Castro Córdova, 2011). Asimismo, la creciente autonomización de los gobernadores estatales frente al Presidente no es prueba de una eficiente descentralización del Poder Federal; más bien, facilitó el resurgimiento de prácticas caciquiles y autoritarias sin rendición de cuentas (Aziz Nassif, 2009:50; Martínez Assad, 2009:216).

De este modo, para la mayoría de los mexicanos, la ciudadanía y la democracia –considerada esta última no tanto como celebración periódica de elecciones más o menos limpias sino como una forma de gobierno que se basa en la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones públicas– siguieron siendo paradigmas de convivencia inalcanzables. La supuesta igual-

dad formal chocaba cada vez más con una creciente desigualdad real, al mismo tiempo que la ideología de la libertad se alzó como un principio de no-interferencia en el derecho a la apropiación privada sin fin. En este contexto, y después de que se había desvanecido la euforia provocada por la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales del año 2000, se amplió de nuevo la brecha entre gobernantes y gobernados. La crisis en torno al fraude en las elecciones presidenciales del año 2006 era la manifestación más clara de esta ruptura entre gobernantes y gobernados, y llevó al quiebre definitivo de la unidad política. Por cierto, era también el momento de mayor apertura para una solución que incluyera por lo menos parcialmente las reivindicaciones de los grupos y clases subalternos, expresadas en el movimiento contra el fraude electoral. No obstante, la consolidación de viejas estructuras y el surgimiento de nuevas estructuras autoritarias del Estado, realizada desde entonces en el marco de la llamada guerra contra el narco y el crimen organizado, ha cambiado radicalmente las reglas del juego político en detrimento de los movimientos sociales y demás fuerzas emancipadoras. Lejos de ser una estrategia efectiva en contra de los cárteles de la droga, la proclamada guerra y la consiguiente militarización de las relaciones político-sociales socavan todavía más las ya de por sí debilitadas bases del Estado de derecho.

En el marco de un fuero que impide su acusación ante tribunales civiles, la masiva presencia del ejército en la vía pública está causando un drástico aumento de las violaciones a los derechos humanos, que incluyen tortura sistemática, asesinatos y desapariciones forzadas. Sobra decir que la militarización va acompañada de una sistemática criminalización y judicialización de la protesta social. En conjunto, se trata de la instauración de medidas y espacios extralegales que están diseñados para dificultar e impedir la organización y la articulación de movimientos y grupos de oposición. Es significativo que a pesar de una amplia gama de movimientos sociales surgidos durante la última década, éstos se vieron obligados a limitarse a estrategias defensivas frente a la embestida del autoritarismo neoliberal (Modonesi et al., 2011). A pesar de la profunda ruptura entre gobernantes y gobernados, se trata de una crisis política “cerrada” en cuanto a posibles desenlaces emancipadores. Sus orígenes se encuentran más en una destrucción de los viejos pactos de dominación desde “arriba” que en una sublevación activa y masiva de los grupos y clases subalternos desde “abajo”. Este hecho podría allanar el camino para una solución conservadora de la crisis, siendo el PRI en el 2012 el instrumento utilizado por la oligarquía para conservar el poder. El triunfo del priísmo en las pasadas elecciones en el Estado de México, en

julio de 2011, por lo menos mostró una renovada eficacia de su proyecto neoliberal clientelar frente a las vastas masas marginadas y empobrecidas de ese estado.

Conclusión

En resumen, las tres décadas de neoliberalismo en México arrojan un saldo paradójico: tanto en lo económico como en lo político se manifiesta un ciclo de crisis prolongadas del modelo neoliberal; no obstante, sus mecanismos e instrumentos se van profundizando al paso que se agrava su propio fracaso. Se trata, en cierto sentido, de una crisis prolongada y estable, *contradictio in adiecto* que plantea nuevos retos para el análisis de la situación actual latinoamericana y mexicana en específico. En contra de perspectivas cortoplacistas que proclaman de manera anticipada el fin de una época que se niega a morir, es necesario datar los orígenes de la crisis actual en la reestructuración del capitalismo a partir de los años setenta del siglo pasado. El descenso del viejo hegemón mundial ha dado lugar a una fase prolongada de inestabilidad, caracterizada por la financiarización de los ciclos de acumulación. A pesar de que no hay rastros de una nueva onda larga expansiva, varios países latinoamericanos aprovecharon el margen de maniobra a lo largo de la última década –abierto por los problemas internos de Estados Unidos, así como el ascenso de China como socio comercial– para distanciarse en diferentes grados del proyecto neoliberal. Su desempeño económico en la última crisis a partir de 2008 ha revalidado este giro, mientras que México registra la recesión más grave de toda la región. A pesar de sus altos costos sociales, no se vislumbra empero ninguna alternativa al férreo enganche de las élites mexicanas al neoliberalismo, estrechamente ligado al proyecto hemisférico de Estados Unidos. ¿Cuáles son, entonces, las razones que explican esta continuación del modelo neoliberal en México, al mismo tiempo que se profundiza su propia crisis?

Con base en lo antes expuesto, intentamos dar algunas respuestas tentativas a esta paradoja. En cuanto al ámbito económico, llama la atención que la crisis prolongada no parece afectar hasta ahora el desempeño de los grandes consorcios y empresas operantes en México. Mientras bajan los salarios y aumenta la pobreza, se mantienen o hasta crecen las ventas y ganancias de los grandes grupos empresariales del país. Por un lado, esto se explica por la enorme concentración de la actividad económica; la desregulación y liberalización del comercio exterior, junto con la privatización de las empresas públicas, han propiciado la formación de oligopolios y monopolios

que ocupan prácticamente todos los sectores económicos (Tello, 2010:37). Así, y a pesar de un mercado interno mermado, los grandes consorcios han podido embolsar ganancias monopólicas mientras que el consumo de las masas populares se basa cada vez más en el crédito. Por otro lado, gran parte de la actividad manufacturera se dirige al exterior, pudiendo prescindir de un mercado interno basado en altos salarios. Ambas estrategias, sin embargo, avocinan un futuro inestable. El recurso al crédito no es más que una válvula de escape de corta duración; se trata de un consumo “anticipado” que se contraerá en un futuro próximo, dado que el mayor endeudamiento privado de las clases populares llevará al pago elevado de intereses en desmedro de la demanda interna. También la orientación de la producción manufacturera al mercado estadounidense parece llegar a sus límites: tanto los problemas económicos del viejo hegemón como la creciente competencia de los productos chinos han reducido la demanda por parte de Estados Unidos. De esta manera, y añadiendo finalmente el agotamiento del mayor campo de petróleo del país, la economía mexicana prescinde de cualquier elemento dinámico interno que pudiera fungir como fuerza motriz. Al contrario, depende casi completamente del desempeño económico de Estados Unidos, que por varias razones no deja prever una pronta recuperación (Huerta González, 2010). Está por ver entonces si la enorme concentración y la estructura oligopólica y monopólica de la economía mexicana permiten a los grandes consorcios mantener sus ventas y utilidades en medio de un contexto de crisis económica prolongada; pues hasta ahora por lo menos se han beneficiado por una política económica de desregulación y de austeridad en desmedro de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas, lo cual explica también su apoyo a la política económica neoliberal de los gobiernos en turno.

Además del amplio apoyo de las élites mexicanas al modelo neoliberal, este último cuenta con un alto nivel de institucionalización. Por un lado, la autonomización del banco central en 1993 llevó la política de austeridad a rango constitucional y subordinó el crecimiento económico a la estabilidad de los precios; por otro lado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de 1994 aseguró la apertura comercial, permitiendo el libre flujo de bienes y servicios –mas no de mano de obra– entre los tres países integrantes. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte a partir de 2005, a su vez, implicó una nueva cualidad en la institucionalización del neoliberalismo en la región: combina los temas de seguridad y de neoliberalismo, asegurando el acceso por la fuerza a los recursos naturales y energéticos de México.

En el ámbito político, las falsas promesas de liberalización y de democra-

tización prometidas por los apologistas del modelo neoliberal apuntaron a una sistemática individualización, diseñada para justificar la enorme desigualdad y el ataque a los medios de subsistencia de los mexicanos. No lograron sustituir la legitimidad del viejo régimen priísta y de sus lazos corporativos, sino profundizaron todavía más la brecha entre gobernantes y gobernados. Al respecto, y a pesar de la escasa capacidad articuladora de los movimientos sociales a nivel nacional y de una izquierda política fragmentada que no dispone de una fuerte estructura partidaria, el descontento generalizado de la población presenta una amenaza latente de inestabilidad. Es por ello que en la sombra de una ciudadanía vacía de contenidos y de instituciones electorales y democráticas corrompidas se ha optado por la construcción de nuevos soportes autoritarios tanto dentro como afuera del Estado, como son la partidocracia, la mediocracia y el nuevo poder de los gobernadores a nivel estatal. En cierto sentido, se trata de una estrategia de “seguridad preventiva” (Rodríguez Rejas, 2011) para impedir o dificultar espacios de organización y de articulación por parte de movimientos sociales y de grupos de oposición. El eje de esta política autoritaria es la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y la subsiguiente militarización de las relaciones políticas y sociales. Al respecto, el establecimiento de un Estado de sitio *de facto* ha dificultado la labor de los movimientos sociales y de grupos de oposición, que a menudo se vieron obligados a desviar su orientación hacia posiciones y estrategias defensivas. Con ello, se abrieron espacios autoritarios y militarizados dentro de los cuales las élites mexicanas han logrado continuar y profundizar todavía más las medidas neoliberales. Por la misma razón, se trata de una crisis política “cerrada” en cuanto a posibles desenlaces emancipadores.

Como mostraron las elecciones intermedias en 2009, así como las del Estado de México en julio de 2011, el proyecto neoliberal clientelar del PRI ha encontrado una eficacia renovada frente a las masas empobrecidas y marginadas de las grandes ciudades y del campo. Una larga experiencia y una todavía potente maquinaria electoral parecen ser las condiciones suficientes para evocar el restablecimiento del viejo pacto corporativo. Su orientación neoliberal indica que se trata más bien de un mero simulacro corporativo que en realidad es clientelar-autoritario; lo que antes era un compromiso que involucraba tanto gobernantes como gobernados, parece reducirse ahora a una relación clientelar de apoyo material esporádico sin garantizar los derechos plenos de bienestar y de protección.

Bibliografía

- ÁLVAREZ BÉJAR, Alejandro (2011), "México 2012: ¿El retorno de los brujos?", en *Memoria*, México, núm. 250, febrero-marzo, pp. 4-11, <<http://www.revis.tamemoria.com/vista.php?>>, consultado el 27 de agosto de 2011.
- AMIN, Samir (2009), *La crisis. Salir de la crisis del capitalismo o salir del capitalismo en crisis*, Madrid, Viejo Topo.
- ANDERSON, Perry (1997), "Neoliberalismo: balance provisorio", en Emir SADER y Pablo GENTILI (coordinadores), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, pp. 15-27.
- ARRIGHI, Giovanni (1999), *El largo siglo XX*, Madrid, Akal.
- ARROYO PICARD, Alberto (2009), "El proceso de globalización neoliberal en las Américas: sobreviviendo entre derrotas", en Jorge FUENTES MORÚA y Telésforo NAVA VÁZQUEZ (coordinadores), *Crisis del Estado: México 2006*, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Miguel Ángel Porrúa, pp. 13-43.
- ÁVALOS TENORIO, Gerardo (2007), "El despliegue político del capital", en Gerardo ÁVALOS TENORIO y Joachim HIRSCH (coordinadores), *La política del capital*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 57-127.
- AZIZ NASSIF, Alberto (2009), "El desencanto de una democracia incipiente: México después de la transición", en Octavio RODRÍGUEZ ARAUJO (coordinador), *México: ¿un nuevo régimen político?*, México, Siglo XXI, pp. 9-62.
- BABB, Sarah (2003), *Proyecto México: los economistas del nacionalismo al neoliberalismo*, México, Fondo de Cultura Económica.
- BORIS, Dieter (2003), *Mexiko im Umbruch*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- BORIS, Dieter (2009), *Lateinamerikas Politische Ökonomie*, Hamburg, VSA Verlag.
- CALVA, José Luis (2010), "Reforma económica para el crecimiento sostenido con equidad", en *Economía UNAM*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 7, núm. 21, pp. 15-36, <<http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam21/ECU002100702.pdf>>, consultado el 27 de agosto de 2011.
- CASTRO CÓRDOVA, Rosario (2011), "Dominio del poder mediático sobre el poder político: la relevancia de la pantalla "chica" en el gobierno del presidente Felipe Calderón", en *Revista Redpol*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, núm. 3, <http://redpol.azc.uam.mx/descargas/numero3/8_Dominio_del_poder_mediativo_sobre_el_poder_politico_la_rel.pdf>, consultado el 8 de agosto de 2011.
- CORDERA CAMPOS, Rolando, Leonardo LOMELÍ VANEGAS y Camilo FLORES ÁNGELES (2009), "De crisis a crisis: del cambio del régimen económico a la transición inconclusa", en *Economía UNAM*, México, Universidad Nacional Autónoma

- de México, vol. 6, núm. 17, pp. 9-29, <<http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam17/ECU001700601.pdf>>, consultado el 13 de agosto de 2011.
- DAGNINO, Evelina, Alberto OLVERA y Aldo PANFICHI (coordinadores) (2006), *La disputa por la construcción democrática en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 15-99.
- DE LA GARZA TOLEDO, Enrique (2010), "El modelo económico neoliberal y los límites de las configuraciones productivas en México", en Enrique DE LA GARZA TOLEDO y Julio César NEFFA (coordinadores), *Trabajo y modelos productivos en América Latina*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 53-102.
- DUMÉNIL, Gérard y Dominique LÉVY (2007), *Crisis y salida de la crisis: orden y desorden neoliberales*, México, Fondo de Cultura Económica.
- DUSSEL PETERS, Enrique (2009), "El aparato productivo mexicano. Entre la crisis global y el caos de la política nacional", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 220, marzo-abril, pp. 112-124.
- ENCISO, Angélica (2011), "En el sexenio calderonista ha crecido en 13 millones el número de pobres", en *La Jornada*, México, 30 de julio, <<http://www.jornada.unam.mx/2011/07/30/politica/002n2pol>>, consultado el 5 de agosto de 2011.
- FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Paulina (2009), "De la transición democrática a un autoritarismo renovado", en Gerardo ÁVALOS TENORIO (coordinador), *El Estado mexicano*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 247-261.
- GANDARILLA SALGADO, José Guadalupe (2003), *Globalización, totalidad e historia. Ensayos de interpretación crítica*, Buenos Aires, Herramienta/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.
- GANDARILLA SALGADO, José Guadalupe (2008), *El presente como historia*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México.
- GÓMEZ TAGLE, Silvia (1997), "México en la realidad virtual: las elecciones de 1994", en Silvia GÓMEZ TAGLE (coordinadora), *1994: las elecciones en los estados*, México, La Jornada/Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 11-58.
- GRIFFIN, Roger (2010), *Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler*, Madrid, Akal.
- HERF, Jeffrey (1990), *El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich*, México, Fondo de Cultura Económica.
- HOWARD KUNSTLER, James (2007), *La gran emergencia*, Huesca, Barrabes.

- HUCHIM, Eduardo (2009), “Elecciones: avances, fallas y simulación”, en Octavio RODRÍGUEZ ARAUJO (coordinador), *México: ¿un nuevo régimen político?*, México, Siglo XXI, pp. 151-196.
- HUERTA GONZÁLEZ, Arturo (2010), “La crisis persistirá, mientras no cambie el patrón de acumulación”, en *Memoria*, México, núm. 240, marzo, pp. 1-17, <<http://www.revistamemoria.com/vista.php?>>, consultado el 5 de septiembre de 2011.
- IMHOF, Karen (2003), *Verschuldung, Finanzkrise und die Etablierung neoliberaler Hegemonie in Mexiko*, en Joachim BECKER, Ronald HEINZ, Karen IMHOF, Karin KÜBLBÖCK, Wolfram MANZENREITER (coordinadores), *Geld Macht Krise*, Wien, Promedia/Südwind, pp. 89-114.
- LABASTIDA MARTÍN DEL CAMPO, Julio y Miguel Armando LÓPEZ LEYVA (2004), “México: una transición prolongada (1988-1996/97)”, en *Revista Mexicana de Sociología*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, año 66, núm. 4, octubre-diciembre, pp. 749-806.
- MARICHAL, Carlos (2010), *Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008*, México, Debate.
- MARTÍNEZ ASSAD, Carlos (2009), “Los gobernadores y el sistema político”, en Octavio RODRÍGUEZ ARAUJO (coordinador), *México: ¿un nuevo régimen político?*, México, Siglo XXI, pp. 197-225.
- MERINO, Mauricio (2009), “La reforma electoral y el nuevo régimen político de México”, en Octavio RODRÍGUEZ ARAUJO (coordinador), *México: ¿un nuevo régimen político?*, México, Siglo XXI, pp. 227-252.
- MODONESI, Massimo, Lucio OLIVER, Fernando MUNGUÍA GALEANA y Mariana LÓPEZ DE LA VEGA (2011), “México 2000-2009: una década de resistencia popular”, en Massimo MODONESI y Julián REBÓN (coordinadores), *Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 225-254.
- MORALES OYARVIDE, CÉSAR (2011), “El fracaso de una estrategia: una crítica a la guerra contra el narcotráfico en México, sus justificaciones y efectos”, en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 231, enero-febrero, pp. 4-13, <http://www.nuso.org/upload/articulos/3749_1.pdf>, consultado el 14 de agosto de 2011.
- MORENO BRID, Juan Carlos y Jaime Ros BOSCH (2010), *Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. Una perspectiva histórica*, México, Fondo de Cultura Económica.
- PAZ, Fernando (2010), “Crisis, regulaciones y política económica”, en *Economía informa*, México, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma

- de México, núm. 364, julio-septiembre, pp. 27-37, <<http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/364/06fernandopaz.pdf>>, consultado el 13 de agosto de 2011.
- PIRKER, Kristina (2001), “Der Herbst der Patriarchen... Mexikanische Gewerkschaften und neoliberale Globalisierung”, en *Journal für Entwicklungspolitik*, núm. 17 (3-4), pp. 255-271.
- RODRÍGUEZ REJAS, María José (2011), “La otra cara de la militarización en México”, en versión electrónica: <http://www.nodo50.org/tortuga/IMG/pdf/militarizacion_mexico_passa_palavra.pdf>, consultado el 12 de agosto de 2011.
- ROUX, Rhina (2005), *El príncipe mexicano*, México, Era.
- ROUX, Rhina (2007), “México, cambio de siglo. La desintegración de la res pública”, en *Argumentos*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, vol. 20, núm. 53, pp. 93-113, <<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/595/59502005.pdf>>, consultado el 14 de agosto de 2011.
- SAMANIEGO, Norma (2010), “El empleo y la crisis. Precarización y nuevas válvulas de escape”, en *Economía UNAM*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 7, núm. 20, pp. 47-70, <<http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam20/ECU002000703.pdf>>, consultado el 12 de agosto de 2011.
- TEJEDA, Armando (2011), “Desapariciones forzadas en México, al nivel de las cometidas en dictaduras: AI”, en *La Jornada*, México, 2 de agosto, <<http://www.jornada.unam.mx/2011/08/02/politica/005n1pol>>, consultado el 4 de agosto de 2011.
- TELLO, Carlos (2010), “Estancamiento económico, desigualdad y pobreza: 1982-2009”, en *Economía UNAM*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. 7, núm. 19, pp. 5-44, <<http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam19/ECU001900701.pdf>>, consultado el 11 de agosto de 2011.
- ZEPEDA MARTÍNEZ, Roberto (2009), “Disminución de la tasa de trabajadores sindicalizados en México durante el periodo neoliberal”, en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. LI, núm. 207, septiembre-diciembre, pp. 57-81, <<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/421/42116005004.pdf>>, consultado el 11 de agosto de 2011.

